

BOLETIN DE NOTICIAS
COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.
En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 277		FECHA: 8 de Enero de 2018
SUMARIO		
PAÍS	CONTENIDO	NºPÁG.
AMÉRICA LATINA	HONDURAS, PERÚ, CHILE: DESCOMPOSICIÓN DEMOCRÁTICA	2
	AMÉRICA LATINA: EL PÉNDULO SE DESPLAZA A LA DERECHA	3
	PAÍSES HOSTILES Y PAÍSES INVISIBLES: EE. UU. Y SUS NEGOCIOS EN EL CARIBE	8
COLOMBIA	PARAMILITARISMO ESTRUCTURADO, PROTEGIDO Y EN BÚSQUEDA DE VENGANZA	10
ECUADOR	CLAVES DE LA DISPUTA POLÍTICA EN ECUADOR	12
HAITÍ	HAITÍ: MUJERES QUE TUVIERON HIJOS CON CASCOS AZULES DEMANDAN A LA ONU	15
HONDURAS	COMUNICADO DEL SICSAL ANTE LOS ACONTECIMIENTOS ELECTORALES EN HONDURAS	16
MÉXICO	EN RIESGO LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE CENTENARES FAMILIAS DESPLAZADAS-RETORNADAS EN CHALCHIHUITÁN	17
NICARAGUA	DE REAGAN AL SENADO NORTEAMERICANO A LA NICA ACT	18
PERÚ	EL INDULTO A FUJIMORI ENCIENDE LA POLÍTICA PERUANA	19
VENEZUELA	LAS DOCE VICTORIAS DEL PRESIDENTE MADURO EN 2017	21

AMÉRICA LATINA

HONDURAS, PERÚ, CHILE: DESCOMPOSICIÓN DEMOCRÁTICA

En las últimas semanas asistimos a la escenificación de la deslegitimación de las democracias electorales en América Latina. Me refiero al fraude electoral contra la oposición en Honduras, al irresistible ascenso del fujimorismo que está a punto de desplazar al presidente electo con un golpe parlamentario y al retorno del empresario derechista Sebastián Piñera a la presidencia en Chile. En los tres casos parece evidente que el sistema democrático no sirve a los intereses de los sectores populares.

En Honduras se produjo un doble fraude. En 2009 se había dado un golpe institucional contra el presidente Manuel Zelaya porque pretendía postularse a la reelección que está expresamente prohibida por la Constitución. Sin embargo, en 2015 la Corte Suprema de Justicia falló de manera unánime señalando la inaplicabilidad del artículo 239 que prohíbe la reelección. O sea, la misma Corte que destituyó a Zelaya, violó la Constitución para hacer lo contrario.

Días atrás, hasta la OEA de Luís Almagro se pronunció por repetir unas elecciones que a todas luces fueron irregulares, aunque el Tribunal Supremo Electoral parece haber zanjado la cuestión en favor del presidente Juan Orlando Hernández. Nada indica que el corrupto poder hondureño, que provocó el asesinato de Berta Cáceres y de otras 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas, vaya a retroceder. Ni que la OEA sea tan beligerante en este caso como lo está siendo con Venezuela.

En Perú el Parlamento con mayoría absoluta fujimorista está al borde de un golpe parlamentario para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, economista y empresario neoliberal. La justicia lo acusa de haber favorecido a la brasileña Odebrecht en 2006 cuando era el primer ministro de Alejandro Toledo. Lo que indigna es que sea el partido de Keiko Fujimori, que cobija a los genocidas y corruptos del régimen de su padre, Alberto, preso que será puesto en libertad si ganan la Presidencia, quien esté al frente del ataque al actual gobierno.

El fujimorismo busca hacerse con el control del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía de la Nación, a cuyos miembros acusa de presunto lavado de activos del narcotráfico. El control del Parlamento puede terminar por ahogar todas las instituciones del país, entre ellas la Corte Suprema, para evitar que la justicia siga adelante con el caso Lava-Jato que implica a los Fujimori. En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano suspender el proceso contra miembros del Tribunal Constitucional (goo.gl/V6gkfm).

Llama la atención que las izquierdas no denuncien golpe cuando el proceso contra Kuczynski tiene rasgos similares a la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. Parte de la izquierda peruana (el Frente Amplio de Marco Arana) está empujando el mismo carro que el fujimorismo, seguramente por cálculos electoralistas.

En Chile, Piñera ganó la Presidencia con poco más de 25 por ciento de los votos, ya que más de la mitad de los habilitados decidieron no concurrir a las urnas. No es la primera vez que esto sucede. Desde que la votación no es obligatoria, el porcentaje de votantes cayó abruptamente. En la segunda vuelta la abstención fue apenas menor que en la primera, porque el electorado decidió que entre el candidato oficialista (Alejandro Guillier) y el millonario neoliberal hay poca diferencia.

Algunos analistas progresistas sostienen que no votar es un síntoma de despolitización. No dicen que la ley antiterrorista ha sido y es aplicada en Chile por los gobiernos progresistas de Bachelet contra el pueblo mapuche, pese a que incluso órganos de las Naciones Unidas se han pronunciado en contra de su aplicación en el conflicto de la Araucanía.

La reforma educativa a la que se comprometió el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) es otra promesa incumplida que recibió duras críticas del movimiento estudiantil porque no considera la educación como un derecho social, no termina con el sistema de créditos con garantía estatal, no

pone fin al lucro y no da plazos explícitos para la gratuidad (goo.gl/EiJfie). Ni qué hablar de las AFAP, sistema privado de pensiones que se mantiene en pie desde la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Estos tres casos merecen algunas consideraciones sobre la democracia electoral y las estrategias de quienes queremos cambiar las cosas.

La primera es la inconsistencia de las llamadas instituciones democráticas y también de las organizaciones internacionales como la OEA, que aplican un doble rasero desvergonzado. El Poder Judicial y el Parlamento (que deberían velar por los derechos y representar a la población, respectivamente), se han convertido en instituciones decorativas que son manejadas por los poderes económicos y las mafias (como el fujimorismo y las élites hondureñas) según sus propios intereses.

La segunda es que estamos viviendo tiempos de turbulencia global que llevan a los poderosos a quitarse las máscaras, siendo la careta democrática la primera en caer para dejar paso al gesto adusto de la fuerza bruta. Esto sucede en todo el mundo, empezando por las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Ni qué hablar de países como los nuestros, donde los Estados-nación conservan un nítido sello colonial.

La tercera es qué hacemos ante esta realidad. No propongo ignorar los escenarios electorales, sino definir una estrategia que los coloque en su justo lugar. El primer paso de cualquier estrategia en el escenario actual es consolidar las organizaciones, territorios y espacios de los sectores populares. Eso quiere decir: apuntar hacia educación propia, salud propia, justicia propia y poder propio. No depender de los Estados, ni de las instituciones internacionales. Construir organizaciones sólidas y flexibles capaces de navegar en las tormentas.

Si lo anterior funciona, podemos pensar en el calendario electoral y dedicarle algunas fuerzas. Sin desarmar los mundos propios, naturalmente.

Fuente: Raúl Zibechi. La Jornada

AMÉRICA LATINA: EL PÉNDULO SE DESPLAZA A LA DERECHA

Introducción

Es evidente que en América Latina el péndulo se ha desplazado a la derecha en los últimos años. De esta observación surgen numerosas preguntas. ¿De qué tipo de derecha estamos hablando? ¿Por qué prospera? ¿Son sostenibles los regímenes derechistas? ¿Quiénes son sus aliados y sus adversarios internacionales? Una vez en el poder, ¿qué tal les ha ido y cuáles son los criterios por los que se mide su éxito o su fracaso?

Aunque la izquierda está en retroceso, retiene el poder en algunos estados. Surgen preguntas como: ¿Cuáles son las características de la izquierda actual? ¿Por qué algunos regímenes se mantienen mientras otros están en decadencia o han sido derrotados? ¿Podrá la izquierda recuperar su influencia? ¿Qué condiciones hacen falta para ello? ¿Qué programa deben llevar para atraer al electorado?

Empezaremos examinando el carácter y las políticas de la derecha y de la izquierda y hacia dónde se dirigen, para concluir analizando las dinámicas de sus programas, alianzas y perspectivas futuras.

La derecha radical: El rostro del poder

La pretensión de los regímenes de derechas es poner en marcha cambios estructurales: quieren reordenar la naturaleza del Estado, las relaciones sociales y económicas, la política exterior y las alianzas económicas. Regímenes de derecha radical gobiernan en Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú, Paraguay, Guatemala, Honduras y Chile.

Los regímenes de extrema derecha han acometido cambios bruscos algunos países, mientras en otros los van incorporando gradualmente. Las transformaciones sufridas por Brasil y Argentina son ejemplos de cambios extremadamente regresivos destinados a invertir la distribución de la renta, las relaciones de propiedad, las alianzas internacionales y las estrategias militares. El objetivo es redistribuir los ingresos de manera ascendente, volver a concentrar la riqueza y la propiedad en el extremo superior de la pirámide social y en elementos externos al país, y plegarse a la doctrina imperial. Estos regímenes están dirigidos por gobernantes que hablan abiertamente en favor de los inversores nacionales y extranjeros más poderosos y son generosos en la adjudicación de subsidios y recursos públicos: practican una especie de “populismo para plutócratas”.

La llegada al poder y la consolidación de regímenes de extrema derecha en Argentina y Brasil se ha basado en varias intervenciones decisivas, que combinan elecciones y violencia, purgas e incorporaciones, propaganda en los medios de comunicación de masas y profunda corrupción.

Mauricio Macri contó con el apoyo de los principales medios convencionales, encabezados por el grupo del diario Clarín, así como por la prensa internacional financiera (Financial Times, Wall Street Journal). Los especuladores de Wall Street y el aparato político de Washington en el extranjero subsidiaron su campaña electoral.

Macri, su familia, sus amigotes y sus cómplices financieros transfirieron recursos públicos a cuentas privadas. Los popes políticos de provincias y sus actividades clientelares se unieron a los sectores adinerados de Buenos Aires para asegurar el voto en la capital. Una vez elegido, el régimen de Macri transfirió 5.000 millones de dólares al conocido especulador de Wall Street, Paul Singer firmando un crédito multimillonario, con altos tipos de interés; multiplicó por seis el impuesto a algunos servicios; privatizó el petróleo, el gas y terrenos públicos; y despidió a decenas de miles de funcionarios.

Macri organizó una purga política y la detención de dirigentes de la oposición, incluyendo a la antigua presidenta Cristina Fernández Kirchner. Varios activistas de provincias fueron encarcelados o incluso asesinados.

Macri ejemplifica la figura del triunfador desde la perspectiva de Wall Street, Washington y la élite empresarial porteña. Los salarios de los trabajadores argentinos se han reducido. Las compañías de servicios se han asegurado los mayores beneficios de la historia. Los banqueros duplicaron el índice de beneficios. Los importadores se han convertido en millonarios. Los ingresos de la agroindustria se dispararon al reducirse sus impuestos. Pero para las pequeñas y medianas empresas argentinas, el régimen de Macri ha sido un auténtico desastre. Miles de ellas han quebrado a causa del elevado coste de algunos servicios y la feroz competencia de las importaciones baratas chinas. Además de la caída de los salarios, el desempleo y el subempleo se han duplicado y el índice de pobreza extrema se ha triplicado.

La economía lucha por mantenerse a flote. La financiación de la deuda no ha conseguido promover el crecimiento, la productividad, la innovación y las exportaciones. La inversión extranjera se ha visto favorecida, ha conseguido pingües beneficios y saca fuera del país sus ganancias. La promesa de prosperidad apenas ha beneficiado a un cuarto de la población. Para debilitar el descontento público fruto de estas medidas, el régimen ha acallado las voces de los medios independientes, ha dado rienda suelta a las pandillas de matones que actúan contra los críticos y ha cooptado a los jefes sindicales maleables para que rompieran las huelgas.

Las protestas públicas y las huelgas se han multiplicado, pero el gobierno ha hecho oídos sordos y multiplicado la represión. Los líderes populares y los activistas han sido estigmatizados por los gacetilleros financiados por el gobierno.

A menos que se produzca un gran levantamiento social o un colapso económico, Macri se aprovechará de la fragmentación de la oposición para asegurar la reelección que le permita seguir actuando como un gángster de Wall Street. Macri está dispuesto a firmar nuevas bases militares y acuerdos de libre comercio con EE.UU. así como a incrementar la colaboración con la siniestra policía secreta de Israel, el Mossad.

Brasil ha puesto en práctica las mismas políticas derechistas de Macri. Tras alzarse con el poder mediante una operación de destitución falsaria, el gran estafador Michel Temer procedió acto seguido a dismantelar la totalidad del sector público, congelar los salarios por veinte años y ampliar la edad de jubilación de cinco a diez años. Temer estuvo a la cabeza de un millar de cargos electos corruptos en el saqueo multimillonario de la compañía estatal de petróleo y múltiples grandes proyectos de infraestructuras.

Golpe, corrupción y desacato quedaron ocultos por un sistema que garantiza la impunidad de los congresistas hasta que algunos fiscales independientes investigaron, acusaron y metieron en prisión a varias docenas de políticos, pero sin llegar a Temer. A pesar de contar con el 95 por ciento de desaprobación popular, el presidente Temer se mantiene en el cargo con el respaldo absoluto de Wall Street, el Pentágono y los banqueros de Sao Paulo.

Por otra parte, en México, el narcoestado asesino, continúan alternándose en el poder los dos partidos ladrones, el PRI y el PAN. Miles de millones de dólares obtenidos de manera ilícita por banqueros y mineras canadienses y estadounidenses continúan viajando a paraísos fiscales para su conveniente lavado. Los fabricantes mexicanos e internacionales han amasado inmensos beneficios que exportan a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales. El país superó su triste record de evasión de impuestos al tiempo que ampliaba sus "zonas de libre comercio", sinónimo de salarios bajos e impuestos reducidos a las empresas. Millones de mexicanos han cruzado la frontera para huir del capitalismo gansteril depredador. El flujo de cientos de millones de dólares de beneficios propiedad de multinacionales canadienses y estadounidenses son el resultado del "intercambio desigual" de capital estadounidense y mano de obra mexicana, que se mantiene en vigor gracias al fraudulento sistema electoral mexicano.

Al menos en dos ocasiones bien documentadas, las elecciones presidenciales de 1988 y 2006, los candidatos de izquierda Cuahtemoc Cárdenas y Manuel López Obrador ganaron con suficiente margen a sus contrincantes, para ver como posteriormente les robaba su triunfo un conteo fraudulento de los votos.

En Perú, los regímenes extractivistas de derechas han alternado entre la dictadura sangrienta de Fujimori y regímenes electorales corruptos. Lo que se mantiene sin cambios en la política peruana es la entrega de los recursos minerales del país al capital extranjero, la persistente corrupción y la explotación brutal de los recursos naturales por parte de corporaciones mineras de EE.UU. y Canadá, en regiones habitadas por comunidades indígenas.

La extrema derecha expulsó del poder a los gobiernos electos de centro izquierda de Fernando Lugo, en Paraguay (2008-2012) y Manuel Celaya en Honduras (2006-2009), con el apoyo activo y la aprobación del Departamento de Estado de EE.UU. Sus narcopresidentes ejercen ahora el poder mediante la represión contra los movimientos populares y el asesinato de decenas de campesinos y activistas urbanos. Este año, una elección burdamente amañada en Honduras ha asegurado la continuidad del régimen corrupto y las bases militares estadounidenses.

La difusión de la extrema derecha desde Centroamérica y México hasta el Cono Sur está preparando el terreno para la reimplantación de alianzas militares con Estados Unidos y acuerdos comerciales regionales.

El ascenso de la extrema derecha garantiza las privatizaciones más lucrativas y los mayores beneficios para los créditos otorgados por bancos extranjeros. La extrema derecha está preparada para aplastar el descontento popular y los desafíos electorales con violencia. Como mucho, permite que unas pocas élites con pretensiones nacionalistas se vayan alternando en el poder para ofrecer una fachada de democracia electoral.

El giro del centro-izquierda al centro-derecha

El desplazamiento político hacia la extrema derecha se ha extendido como una onda, y los gobiernos nominales de centro-izquierda se han desplazado hacia el centro-derecha.

El ejemplo más claro lo ofrece el Uruguay gobernado por el Frente Amplio de Tabare Vázquez, y Ecuador, con la reciente elección de Lenin Moreno de Alianza País. En ambos casos el terreno ya había sido preparado al reconciliarse estos partidos con los oligarcas de los partidos tradicionales derechistas. Los anteriores gobiernos de centro-izquierda de Rafael Correa, en Ecuador, y José Mujica en Uruguay consiguieron fomentar la inversión pública y las reformas sociales, usando una retórica izquierdista y capitalizando el aumento global de precios y la alta demanda de las exportaciones agrominerales para financiar sus reformas. Con la caída de los precios mundiales y la exposición pública de los casos de corrupción, los recién elegidos partidos de centro-izquierda nominaron a candidatos de centro-derecha que convirtieron las campañas anticorrupción en vehículos para la adopción de políticas económicas neoliberales.

Los nuevos presidentes de centro-derecha marginaron a los sectores más izquierdistas de sus respectivos partidos. En el caso de Ecuador, el partido se fraccionó y el nuevo presidente aprovechó para cambiar sus alianzas internacionales apartándose de la izquierda (Bolivia y Venezuela) y acercándose a Estados Unidos y la extrema derecha, al tiempo que abandonaba el legado de su predecesor en cuanto a programas sociales populares.

Con la caída de precios de los productos de exportación, los regímenes de centro-derecha ofrecieron generosos subsidios a los inversores extranjeros en agricultura y silvicultura en Uruguay y a los propietarios de minas y exportadores en Ecuador.

Los recién convertidos regímenes de centro-derecha se acercaron a sus homónimos ya asentados en Chile y se unieron al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), con las naciones asiáticas, Estados Unidos y la Unión Europea.

El centro-derecha ha intentado manipular la retórica social de los anteriores gobiernos de centro-izquierda con el fin de retener al electorado popular al tiempo que se aseguraba el apoyo de las élites empresariales.

La izquierda se desplaza hacia el centro-izquierda

El gobierno de Evo Morales en Bolivia ha demostrado una capacidad excepcional para mantener el crecimiento, asegurarse la reelección y neutralizar a la oposición combinando una política exterior de izquierda radical con una economía mixta público-privada de carácter moderado. A pesar de que Bolivia condena el imperialismo estadounidense, las principales multinacionales del petróleo, el gas, los metales y el litio han realizado fuertes inversiones en el país. Evo Morales ha moderado su postura ideológica pasando del socialismo revolucionario a una versión local de democracia liberal.

Al adoptar la economía mixta, Evo Morales ha conseguido neutralizar cualquier hostilidad abierta de Estados Unidos y los nuevos gobiernos de extrema derecha de la región.

Manteniendo su independencia política, Bolivia ha integrado sus exportaciones con los regímenes neoliberales de la región. Los programas económicos moderados de su presidente, la diversificación de las exportaciones minerales, la responsabilidad fiscal, las graduales reformas sociales y el apoyo de los movimientos sociales bien organizados han permitido la estabilidad política y la continuidad social, a pesar de la volatilidad de los precios de las materias primas.

Los gobiernos de izquierda de Venezuela, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro han llevado un curso divergente con duras consecuencias. Totalmente dependiente de los precios internacionales del petróleo, Venezuela procedió a financiar generosos programas asistenciales en el ámbito interno y en el exterior. Bajo el liderazgo del presidente Chávez, Venezuela adoptó una consecuente política antiimperialista y se opuso al acuerdo de libre comercio promovido por EE.UU. (ALCA) con una alternativa antiimperialista, la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).

Los programas sociales progresistas y las ayudas económicas a los aliados extranjeros, sin dedicar recursos a diversificar la economía y los mercados ni incrementar la producción, estaban basados en los ingresos elevados constantes procedentes de un único y volátil producto de exportación: el petróleo.

A diferencia de la Bolivia de Evo Morales, que edificó su poder con el respaldo de una base popular organizada, disciplinada y con conciencia de clase, Venezuela contaba con una alianza electoral amorfa compuesta por habitantes de los suburbios humildes, tráfugas de los partidos tradicionales corruptos (de todo el espectro) y oportunistas en busca de un puesto y beneficios. La educación política se reducía a consignas para corear, vítores al presidente y la distribución de bienes de consumo.

Los tecnócratas y políticos venezolanos afines al régimen ocupaban posiciones muy lucrativas, sobre todo en el sector petrolero, y no tenían que rendir cuentas ante consejos de trabajadores o auditorías públicas competentes. La corrupción era generalizada y se robaron miles de millones de dólares procedentes de la riqueza petrolera. Este saqueo era tolerado por el flujo constante de petrodólares motivado por los elevados precios históricos y el auge de la demanda. Todo ello condujo a un extraño escenario en el que el gobierno hablaba de socialismo y financiaba enormes programas sociales mientras los principales bancos, la distribución de alimentos, la importación y el transporte eran controlados por oligarcas hostiles al régimen que se embolsaban enormes beneficios mientras fabricaban la escasez de artículos y promovían la inflación. A pesar de todos estos problemas, los votantes venezolanos avalaron al gobierno en una serie de victorias electorales, sin prestar atención a los agentes de EE.UU. y los políticos de la oligarquía. Esta dinámica de triunfos llevó al régimen a pensar que el modelo socialista bolivariano era irrevocable.

La precipitada caída de los precios del petróleo, de la demanda global y de los beneficios procedentes de las exportaciones llevó a un retroceso de las importaciones y del consumo. A diferencia de Bolivia, las reservas de divisas menguaron, el saqueo rampante de miles de millones fue finalmente sacado a la luz y la oposición derechista apoyada por EE.UU. recurrió a la “acción directa” violenta y al sabotaje, al tiempo que acaparaba alimentos, bienes esenciales de consumo y medicamentos. La escasez dio paso a un mercado negro generalizado. La corrupción del sector público y el control que ejerce la oposición hostil de la banca privada, el sector minorista y el industrial, con el respaldo de Estados Unidos, paralizó la economía. La economía entró en caída libre y el apoyo electoral se ha debilitado. A pesar de los graves problemas del régimen, la mayoría de votantes de renta baja comprendió que sus probabilidades de sobrevivir bajo la oposición oligárquica apoyada por EE.UU. serían todavía peores y la asediada izquierda ha continuado ganando las elecciones regionales y municipales celebradas durante 2017.

La vulnerabilidad económica de Venezuela y el índice de crecimiento negativo han provocado un aumento de la deuda pública. La animadversión de los regímenes de extrema derecha de la región y las sanciones económicas dictadas por Washington han acentuado la escasez de alimentos y el desempleo.

Bolivia, por el contrario, consiguió derrotar los intentos de golpe de Estado promovidos por las élites locales y EE.UU. entre 2008 y 2010. La oligarquía regional de Santa Cruz tuvo que decidir entre compartir sus beneficios y la estabilidad social sellando pactos sociales (con trabajadores y campesinos, la capital y el Estado) con el gobierno de Morales o hacer frente a una alianza del gobierno y el movimiento sindical dispuesto a expropiar sus posesiones. Las élites optaron por la colaboración económica manteniendo una discreta oposición electoral.

Conclusión

La izquierda ha perdido casi todo el poder estatal. Es probable que la oposición a la extrema derecha vaya en aumento dado el ataque grave e inflexible que están sufriendo los ingresos y las pensiones; el aumento del coste de la vida; las graves reducciones en los programas sociales y los ataques al empleo en el sector público y el privado. La extrema derecha tiene varias opciones y ninguna de ellas ofrece concesiones a la izquierda. Han elegido reforzar las medidas policiales (la “solución Macri”); intentan fragmentar a la oposición negociando con líderes sindicales y políticos oportunistas; y sustituyen a los gobernantes caídos en desgracia con nuevas caras que continúen sus mismas políticas (la solución brasileña).

Los antiguos partidos, movimientos y dirigentes revolucionarios de izquierda han evolucionado hacia la política electoral, las protestas y la acción sindical. Por el momento, no representan una alternativa política a nivel nacional.

El centro-izquierda, especialmente en Brasil y Ecuador, está en una posición fuerte y cuenta con líderes dinámicos (Lula Da Silva y Correa) pero tiene que enfrentarse a acusaciones falsas promovidas por fiscales derechistas que pretenden excluirlos de la contienda electoral. A menos que los reformistas de centro-izquierda tomen parte en acciones de masas prolongadas y a gran escala, la extrema derecha conseguirá debilitar su recuperación política.

El Estado imperial de EE.UU. ha recuperado temporalmente regímenes títere, aliados militares y recursos y mercados económicos. China y la Unión Europea se aprovechan de las óptimas condiciones económicas que les ofrecen los regímenes de extrema derecha. El programa militar estadounidense ha conseguido neutralizar la oposición radical en Colombia y el régimen de Trump ha impuesto nuevas sanciones a Cuba y Venezuela.

Pero la celebración triunfalista del régimen de Trump es prematura: no ha logrado ninguna victoria estratégica decisiva, a pesar de los progresos a corto plazo conseguidos en México, Brasil y Argentina. No obstante, las grandes fugas de beneficios, transferencias de propiedades a inversores extranjeros, tasas fiscales favorables, bajos aranceles y las políticas de comercio todavía no han generado nuevas infraestructuras productivas, crecimiento sostenible ni han asegurado las bases económicas. La maximización de los beneficios y el descuido de las inversiones en productividad e innovación para promover la demanda y los mercados internos han provocado la bancarrota de miles de pequeños y medianos locales comerciales e industrias. Esto se ha traducido en un aumento del desempleo crónico y del empleo de mala calidad. La marginación y la polarización social están creciendo a falta de liderazgo político. Esas condiciones provocaron levantamientos “espontáneos” en Argentina en 2001, en Ecuador en 2000 y en Bolivia en 2005.

Puede que la extrema derecha en el poder no provoque una rebelión de la extrema izquierda, pero sus políticas seguramente socavarán la estabilidad y la continuidad de los regímenes actuales. Como mínimo, pueden hacer surgir cierta versión del centro-izquierda que restaure los regímenes de bienestar y empleo actualmente hechos pedazos.

Mientras tanto, la extrema derecha seguirá presionando con su plan perverso que combina un profundo retroceso del bienestar social, la degradación de la soberanía nacional y el estancamiento económico con una formidable maximización de beneficios.

Fuente: James Petras. Rebelión

PAÍSES HOSTILES Y PAÍSES INVISIBLES: EE. UU. Y SUS NEGOCIOS EN EL CARIBE

El 17 de diciembre se cumplieron tres años desde el anuncio del proceso de “normalización” de relaciones entre el gobierno de EE. UU., entonces presidido por Barack Obama, y el gobierno cubano, presidido por Raúl Castro. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense se ha producido el regreso a una política de abierta confrontación con la Revolución Cubana. El episodio más reciente de esta hostilidad manifiesta son las denuncias estadounidenses de supuestos ataques sónicos a su personal diplomático en territorio cubano, que han culminado con la retirada de todo el cuerpo de la Embajada de EE. UU. en La Habana, a excepción del de emergencia, lo que tendrá repercusiones -entre otros aspectos- en la colaboración bilateral en materia de migración.

Este cambio en la postura del gobierno estadounidense, pese a la oposición de grandes sectores del empresariado del país interesados en hacer negocios con Cuba, se puede leer en la lógica de un sector del establishment que ha optado por estrategias de confrontación –en lugar de la supuesta persuasión de Obama– para seguir manteniendo la presión destinada a lograr la definitiva

apertura del mercado cubano, bajo las reglas que EE. UU. considere y, de preferencia, forzando la capitulación de la Revolución Cubana, que es percibida como una piedra en el zapato para los intereses estadounidenses en el Caribe.

La hegemonía estadounidense en el Caribe

Cabe recordar que el Caribe ha sido históricamente un área geopolítica de vital importancia para los intereses estratégicos de EE. UU. desde los tiempos de la guerra hispano-americana. Unas posiciones e influencia que se vieron amenazadas con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la llegada al poder de Maurice Bishop en Granada en 1979 (que concluyó con la invasión estadounidense a dicha isla en 1983), o el inicio de la Revolución Bolivariana en 1998. No se puede entender la política de EE. UU. hacia el Caribe sin tener presentes estos hechos, visualizados por EE. UU. como una cortapisa al control de un territorio que ve como extensión de su frontera (“mar interior”) y a la expansión de las corporaciones estadounidenses en el área.

En este sentido puede explicarse la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI por sus siglas en inglés) que, en sus propias palabras, es “uno de los pilares de la estrategia de seguridad de los EE.UU.” a la que este país ha dedicado más de 473 millones de dólares desde 2010. Unida a ésta, encontramos la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe (CESI por sus siglas en inglés) que, según el Departamento de Estado, “tiene como objetivo impulsar la seguridad energética y el crecimiento económico sostenible en la región mediante la atracción de inversión en una gama de tecnologías energéticas a través de una mejor gobernanza, mayor acceso a la financiación y una mayor coordinación entre los donantes de energía, los gobiernos y las partes interesadas”. Esto es, la seguridad de las inversiones de EE. UU. depende de que haya gobiernos que no impidan con sus políticas la expansión de las corporaciones estadounidenses y, dentro de éstas, el sector energético es clave. De ahí que EE. UU. diseñara la CESI, como respuesta geopolítica al Acuerdo de Cooperación Energética de Petrocaribe impulsado por Venezuela, que estaba ganando aliados políticos en el Caribe por la vía de la cooperación energética.

En realidad, se trata de una estrategia encaminada a ahuyentar competidores económicos o políticos en la zona, sean extrarregionales como China, o hemisféricos, como Venezuela. De ahí la estrategia de cerco a Venezuela pero también la hostilidad hacia Cuba, como dos ejemplos de países que, desde la lógica estadounidense, impiden el flujo de las inversiones provenientes de EE. UU. a la vez que abren la puerta a las inversiones chinas por sus relaciones estratégicas con el gigante asiático. Pero también se trata de garantizar el respaldo político en un área plagada de paraísos fiscales, que ha sido tradicionalmente aliada de EE. UU. en organismos internacionales multilaterales como la OEA, cuyos votos en este organismo cobran mayor importancia en el contexto de ataques al gobierno venezolano desde dicha institución.

Buenos y malos caribeños

Abrir las puertas a la Inversión Extranjera Directa (IED), sin ningún tipo de restricción a dicha inversión, parece ser el ideal de las empresas estadounidenses. En las economías insulares caribeñas, el país que mayor porcentaje de IED recibió en 2016 fue Jamaica, concentrando el 60 % de las inversiones hechas al grupo de los Estados del Caribe anglófono. La mayoría de estas inversiones proceden de capital estadounidense, seguido de chino, mexicano y español. Uno de los proyectos estrella, anunciado en 2016, tiene que ver con las energías verdes o “limpias”, uno de los puntos que EE. UU. establece en la CESI, y supone una inversión en 95 millones de dólares por parte de la estadounidense Benchmark Renewable Energy en Jamaica. Seguramente, ni a las empresas estadounidenses ni a su gobierno se les escapa que Jamaica lleva desde el año 2013 aplicando un plan de “reforma macroeconómica” diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) encaminado a liberalizar la economía.

Otro de los países que EE. UU. valora positivamente para hacer negocios es Granada, el mismo que padeció una de las últimas intervenciones militares abiertas de este país en la región. Sólo dos años después, en 1985, Granada creó la Grenada Industrial Development Corporation (GIDC), la agencia de inversión que facilita la entrada del capital extranjero al país. Casualmente también —o no— el sector energético es otro de los que está en el punto de mira del capital internacional por la

posible liberalización de su mercado eléctrico. El gobierno de Granada está tratando de derogar la Ley de suministro de electricidad de 1994, que daba privilegios exclusivos a la Grenada Electricity Services, propiedad de WRB Enterprises. Para ello, el gobierno propuso en 2016 una Ley de suministro de electricidad que abriría el mercado a la participación de capitales regionales e internacionales, como destaca el Departamento de Estado de EE. UU. en su informe sobre el país. Cabe apuntar que, como Jamaica, Granada es miembro de Petrocaribe, aunque no de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), creada por Venezuela y Cuba en 2004.

Además, los incentivos a la inversión extranjera son muchos. Granada es un paraíso fiscal que no establece ningún tipo de restricción a las transacciones en divisa extranjera, no impide la repatriación de beneficios, capitales o dividendos. Cuenta asimismo con un programa llamado Programa de Ciudadanía por Inversión, que otorga la nacionalidad granadina a los inversores y que ha visto triplicar las solicitudes desde el último año. Sólo en la primera mitad de 2017 el programa recibió 189 solicitudes (62 en el mismo período del año anterior) y, hasta la fecha, ha otorgado más de 449 nacionalidades por inversión. Una iniciativa que recuerda a una puesta en práctica similar implementada por el gobierno del Partido Popular (PP) en España. La diferencia es que el impacto de estas inversiones en economías como las de los microestados caribeños es mucho mayor. Por ejemplo, con el Programa de Ciudadanía por Inversión se podría llegar a cifras de ingreso que se acercarían al 15 % del PIB del país.

Contrastando estos dos casos con la realidad existente en países como Cuba y Venezuela podemos hacernos una idea de que para EE. UU. existen “buenos y malos” caribeños. No es difícil imaginar el interés del establishment estadounidense por poner su pie en las compañías cubanas de propiedad estatal que podría privatizar si el país llegara a dejar de lado las regulaciones económicas que ponen límites a los capitales y las personas extranjeras que quieren invertir en la isla. También es evidente el interés estadounidense por hacerse con el control de PDVSA y acceder así al suculento botín que tiene Venezuela, poseedora de las principales reservas probadas de hidrocarburos en el mundo.

Teniendo en mente los intereses geoestratégicos y geoeconómicos de los Estados Unidos en la región latinoamericano-caribeña, observando su expansión allí donde los gobiernos amigos abren las puertas al capital estadounidense y comparando la opinión favorable hacia estos gobiernos con la actitud hacia aquellos que establecen mayores limitaciones a la inversión o a la participación de EE. UU. en su economía, se puede comprender por qué unos países son hostigados por la prensa internacional y otros son simplemente invisibilizados por las noticias diarias.

(Fuente: Arantxa Tirado. CELAG)

COLOMBIA

PARAMILITARISMO ESTRUCTURADO, PROTEGIDO Y EN BÚSQUEDA DE VENGANZA

A sólo 24 horas de que un alto funcionario del Gobierno le entregara formalmente al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía a dos paramilitares que intentaron asesinar a nuestros líderes, luego de recibirlos, también formalmente, de líderes de nuestra Comunidad de Paz, nos han llegado múltiples testimonios de personas que afirman haber visto a dichos victimarios en plena libertad en las calles de Apartadó. El número de testimonios y la independencia entre ellos nos llena de preocupaciones y ello confirmaría una vez más las íntimas relaciones existentes entre la fuerza pública, el paramilitarismo y el aparato judicial colombiano. Uno de los paramilitares supuestamente liberados, mientras estuvo inmovilizado en nuestra Comunidad afirmó que se vengaría de nosotros por haberle impedido cumplir la misión que le habían encomendado de quitarle la vida a nuestros compañeros del Consejo Interno y por haber salvado las vidas de quienes él tenía orden de destruir. Esto, según él, exige una fuerte retaliación.

Nuevos hechos se han presentado en las últimas horas, los cuales queremos dejar en conocimiento del país y el mundo:

- El **sábado 30 de diciembre de 2017**, el mando paramilitar de la zona, alias “FELIPE”, quien participó en el atentado asesino contra líderes de nuestra Comunidad el viernes 29 de diciembre en compañía de otros cuatro paramilitares, se desplazó enseguida a la vereda Arenas Altas donde ha estado profiriendo anuncios de venganza contra nuestra Comunidad de Paz por haberle impedido realizar su acción criminal y está anunciando nuevamente, enfurecido, que la Comunidad de Paz va a ser destruida. Cuando el viernes 29 se vio forzado a huir del escenario del crimen ante la reacción de la Comunidad, llegó rápidamente al caserío de San José donde se reunió con un amplio grupo de paramilitares que actúa allí; luego recorrió el caserío, completamente controlado por la fuerza pública, y se dirigió hacia la vereda Arenas Altas sin ser molestado por militares ni policías.
- El **sábado 30 de diciembre de 2017**, en un noticiero televisivo de Teleantioquia, el político e integrante del gremio cacaotero de Urabá, CÉSAR JARAMILLO, declaró que los dos paramilitares detenidos no son paramilitares sino inocentes cultivadores de cacao a quienes él asesora. Parece que poco le importa que esos sus asesorados en otros de sus momentos laborales se contraten para quitarle la vida a líderes sociales y para intentar destruir una Comunidad de Paz. ¿Juzga, acaso, que su actividad temporal de cacaoteros fuerza a la sociedad a no tener en cuenta sus acciones criminales? ¿o acaso piensa que los que sufrieron el ataque de estos paramilitares, así como la Comunidad y sus integrantes y acompañantes internacionales quienes presenciaron todo el episodio, no merecen credibilidad y sólo la merecen quienes han visto a estos criminales en sus pasajeras actividades económicas de cultivo de cacao? No quisiéramos pensar que su asesoría a estos temporales cacaoteros incluya instrucciones para uso de armas, estigmatización de comunidades y estrategias de coordinación con la fuerza pública en sus actividades más criminales.
- El **sábado 30 de diciembre de 2017**, paramilitares ampliamente conocidos en el corregimiento de Saiza, del municipio de Tierralta, Córdoba, les manifestaron a los pobladores que estaban muy dolidos por lo ocurrido en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, donde, según su versión, sus compañeros paramilitares fueron “humillados” por la Comunidad que logró impedir el asesinato de sus líderes e inmovilizar y desarmar a dos de sus compañeros paramilitares y prometieron que realizarán próximamente una masacre en la Comunidad de Paz, a la vez que reiteraron su decisión de exterminar nuestra Comunidad.

Todos estos hechos reflejan la tragedia que vive Colombia: unas instituciones que cubren con el silencio, la inacción, la complicidad disimulada y la negación sistemática de la realidad, los más crueles sufrimientos de las capas sociales que no participan del poder; una justicia corrupta en todas sus instancias; una fuerza pública solidaria con los criminales y convertida prácticamente en sus escoltas; unos medios de comunicación que mienten, deforman, tergiversan, silencian y encubren; una clase política degenerada y hundida en su cerrero egoísmo gamonalista y ávida de privilegios exclusivos. En medio de ese panorama el paramilitarismo es la fuerza dominante que se apoya en la complicidad y la negación sistemática de su accionar por parte de todos los poderes. Sostener principios éticos en este contexto es correr el riesgo del exterminio.

Nuestra Comunidad de Paz ha sacrificado ya centenares de vidas por defender sus principios y nunca ha silenciado los crímenes que la han tratado de destruir. En esa heroica lucha nos han acompañado minorías nacionales e internacionales que aún tienen principios éticos. A todas esas comunidades, grupos y organizaciones nuestra gratitud profunda y nuestro compromiso de no claudicar.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 31 de 2017

Fuente: <http://www.cdpsanjose.org/>

ECUADOR

CLAVES DE LA DISPUTA POLÍTICA EN ECUADOR

La crisis política del partido de gobierno (Alianza País-AP) ha trastocado las expectativas de la izquierda ecuatoriana y latinoamericana que, hace apenas seis meses, respiraba aliviada con la llegada de Lenín Moreno al Palacio de Carondelet. Ex vicepresidente de Rafael Correa y legitimado por un proyecto social en favor de las personas con discapacidad, Moreno aglutinaba las fuerzas de la continuidad. Siempre se esperó que el estilo fuese otro, pero pocos auguraban que las diferencias llegaran tan rápido y con el ritmo vertiginoso con que ocurrieron.

¿Cuál es la disputa real en Ecuador que parece no menguar? ¿Cuáles son las perspectivas para un proyecto que venía ganando catorce elecciones consecutivas y hoy tiembla en sus bases? Proponemos algunas claves para entender cuáles son los elementos centrales de una disputa por la apropiación del liderazgo, que hoy se organizan en torno a un propósito claro: desestructurar la figura de Correa y desplazarlo de un escenario de gravitación.

La construcción del liderazgo de Lenín Moreno

Lenín Moreno ya advertía en la primera vuelta electoral: “El estilo será otro”. Con ello proponía un nuevo liderazgo, más conciliador con los que, según él, Correa había dejado de lado. Insistía en volver a los “actores”. Restañar las heridas. Después de diez años de gestión, del impacto de la crisis económica internacional y de un liderazgo envolvente, muchos consideraban que una parte de la sociedad quería cambios en el modo en como éste se administraba o se ejercía. Una sociedad que apoyaba la continuidad de algunas políticas e instituciones que dejó el correísmo con la aparición de un estilo de conducción distinto. El gran Diálogo Nacional –que inició Lenín Moreno– comenzó a aglutinar a todos los espacios partidarios, tanto a aquellos que se opusieron a la Revolución Ciudadana desde el primer momento como aquellos que se fueron oponiendo al transcurrir los años correístas. Invitó a aquellos que hace pocos días atrás le habían desprestigiado y denigrado en la campaña electoral. Esto, de alguna manera, suscitó la primera tensión que Moreno introdujo al liderazgo de Correa y a las fronteras políticas que éste y AP habían delineado. Un acercamiento a la nueva y antigua partidocracia, desde los Bucaram, sinónimo de corrupción, hasta Mauricio Rodas, quien llamó a la desobediencia y a la violencia en la segunda vuelta electoral. La segunda tensión que exacerbó la disputa entre liderazgos fue que esta política era apoyada por la banca, los medios de comunicación y toda la élite empresarial. Lenín Moreno, así, ensayaba una nueva geometría del poder. Mostrar esa capacidad política pateó el tablero de los dirigentes de AP que apoyaban la anterior configuración del poder presidencial.

Estas tensiones se produjeron al calor de la afirmación del nuevo estilo de liderazgo. Una perspectiva sobre el mismo y un actor clave jugarían un papel protagónico en este proceso. La perspectiva moralista y regeneracionista de Lenín Moreno –que enlaza desde una mirada pentecostalista y de cálculo político– y los medios de comunicación establecieron dos contrafiguras: Correa el “mafioso” y Moreno el “alma bella”. No se puede negar que, con su propuesta, el presidente actual capturó cierto apoyo social gracias a una figura antagónica al estilo del presidente Correa. Seguramente, también perdió el apoyo de aquellos que salieron a votar en segunda vuelta por Correa.

Al mismo tiempo, ocurrió lo que se temía en diez años, una crisis en la línea sucesoria del correísmo. No encontrar ni propiciar otro candidato debilitó a AP, a las fronteras políticas que se habían establecido. Lo que se temía ocurrió. Moreno utilizó el apoyo electoral como ventana de oportunidad para acelerar la afirmación de su liderazgo, pospuso promesas de campaña y se acercó a los actores derrotados en las urnas. La afirmación de su liderazgo se volvió el punto cero de su gobernabilidad. Con habilidad detectó que esa política de afirmación era un “territorio” por donde ampliar la base social sumando a parte de ese 49% que no votó por él. Esta estrategia –por ahora– es efectiva. Aunque la pregunta es si esa suma tiene su contrapartida: la resta de aquellos

verdaderamente fieles a las raíces del correísmo. Lenín Moreno se ha lanzado a disputar el liderazgo de Correa y ha presionado a Alianza País con la “representación” del consenso y al diálogo. El nuevo presidente fue a por el líder histórico y por Alianza País. Todo muy rápido, como dice cualquier manual de política maquiaveliano. Primero, el liderazgo y, después, todo lo demás. Erosionar el liderazgo de Correa y las fronteras políticas que éste había organizado se transformaron en la mayor política de Lenín. Cuestión que no puede durar mucho, mientras existen temas económicos por resolver.

¿Cuánto tiempo más podrá el gobierno mantener una estrategia de gobernar con la encuesta bajo el brazo? Por ahora, Lenín Moreno compra tiempo político y legitimidad en el enfrentamiento con Correa. Busca consumir su poder. La jugada es desplazarlo del ring político con una consulta popular que impida su reelección en el año 2021. Apelando a formas liberales de alternancia obligatoria que no garantizan, per se, ni la voluntad general, ni la estabilidad política. Esto ha provocado una fila de espacios políticos que compran palomitas para ver cómo se excluye a Correa. Los grandes medios de comunicación reciben del “cielo” una disputa no imaginada y se encuentran en un escenario doble y propicio: construir adhesión para Lenín Moreno y para ellos mismos. Esta relación está en marcha y, por ahora, fluye. Los medios se preparan para recordarle a Lenín Moreno que tendrá que revisar la Ley de Orgánica de Comunicación una vez que pase la consulta popular. Y, en última instancia, el presidente tendrá que observar, empíricamente, si esta alianza puede acercarlo a quienes no lo votaron. Parece que ese tiempo político no será eterno y comienza a existir alguna señal de agotamiento, como lo confirma la encuestadora CEDATOS: la credibilidad del presidente a 8 de octubre era de 67%, mientras que a 15 de noviembre llegó tan solo al 61%. Este debilitamiento se puede acelerar con la llegada de Correa al país, que en una semana ha eclipsado nuevamente el escenario político.

Pero no solo de alianzas mediáticas viven los presidentes. Lenín Moreno ha sabido construir su liderazgo con base en alianzas con casi todos los sectores del espectro político y empresarial. Esta estrategia fortaleció su imagen de diálogo, a cambio de cesión programática, y lo puso contra las cuerdas con algunos sectores y principios de AP. La apropiación del discurso opositor se ha evidenciado en más de una ocasión. Todo parece valerle a Lenín Moreno para diferenciarse de Correa. Los “heridos” del correísmo son un punto de apoyo para construir una fórmula de gobernabilidad en este tan nuevo como viejo estilo Lenín. Grandes empresarios en la nueva foto para “asegurar” la estabilidad de un país que, así, recuerda demasiado a lo viejo.

Amputando la corrupción, matando al Estado

La discusión sobre la corrupción tiene un efecto práctico: erosionar lo público, vinculándolo al posible desorden e ineficacia. Lenín Moreno vuelve sobre la corrupción planteando como modelo de “reducción” de la misma a la gestión privada. Pero hay algo más. La lucha contra la corrupción se ha transformado en una potente política para impartir disciplina sobre algunos dirigentes de AP y en la reinstalación –de alguna manera– de la idea de Estado mínimo. Hace pocos meses le tocó el turno a las Escuelas del Milenio, un hito de la nueva apuesta por la educación. Con un estudio de evaluación de impacto (con serios problemas metodológicos), se dictaminó que las Escuelas del Milenio no habían cumplido los objetivos. Después fue el turno del proyecto Yachay, las hidroeléctricas, los hospitales, los medios públicos, la deuda pública, etc. Los ataques sistémicos a las obras del anterior Gobierno socavan la relación de largo plazo entre los ciudadanos y el papel de Estado, que el correísmo logró reconstruir. El vínculo propuesto por Lenín Moreno es otro. La lucha contra la corrupción, legítima y necesaria, corre el riesgo de erosionar la figura del Estado como dimensión del desarrollo. El Gobierno actual propone un discurso que encierra más sus guiños a diversos actores económicos y políticos que a una supuesta contradicción o lógica lingüística. Por un lado, indica que antes “todo estuvo mal hecho, nosotros lo haremos bien” y, al mismo tiempo, “el Estado no es capaz de hacerlo”. Críticas al liderazgo anterior y discurso anticorrupción son las dos grandes dimensiones que buscan estructurar el poder del “nuevo

príncipe”. Sin embargo, a veces olvida que él formó parte al más alto nivel de la gestión que ahora critica.

La disputa por el Partido

La interpelación de Correa a Moreno y viceversa, puso al movimiento político bajo fuego cruzado. Fueron varios meses de silencio intentando que la estructura política pudiera metabolizar las diferencias. En las últimas semanas se profundizaron las diferencias hasta llegar a disputarse quién se queda con el partido. El 23 de noviembre pasado, Moreno recibió en Guayaquil el apoyo de todas sus alianzas, mientras que Correa hará lo propio en Esmeraldas este 3 de diciembre. Hay incertidumbre sobre el desenlace. Moreno tiene la ventaja relativa de tener el poder presidencial, aunque por su escaso tiempo en el cargo tampoco se puede afirmar que el control sea pleno. También tiene la llave de la administración del presupuesto con las diferentes provincias, Prefecturas y Alcaldías; y eso le puede permitir algunos pactos territoriales. Al otro lado, está Correa, quien sigue siendo la referencia ordenadora de la política ecuatoriana. Su regreso a Ecuador lo pone en el “llano” y ante un desafío: comprobar en el terreno los apoyos políticos y la posibilidad de ampliarlos.

Podemos esgrimir dos escenarios:

I. En caso de que Moreno se quede con AP, los assembleístas que se queden dentro de este espacio tienen tres retos muy importantes: manejar la relación con otros espacios de oposición, aumentar sus zonas de influencia electoral y la reconfiguración de AP. Igual quedan interrogantes: ¿Lenín Moreno podrá mantener compacta la unidad del bloque y satisfacer a los dirigentes y funcionarios locales de AP que gobiernan territorios? ¿Podrá contentar al mismo tiempo a AP y a todo lo que está por afuera de AP?

Rafael Correa, ya en el país, se encontró con el apoyo de algunos assembleístas y la posibilidad de influir sobre quienes apoyan al presidente. Si Moreno controla AP se quedaría –en principio– con un partido debilitado, pero con la cercanía al Estado y sus instituciones. El escenario económico puede definir parte de la batalla política. Si ésta no despunta Rafael Correa podrá indicar la falta de visión y perspectivas económicas; mientras que Moreno podría recalcar su discurso en la “pesada herencia”. La política y las autoridades se fundamentan en las creencias y ello jugará de manera central en la adhesión a Moreno o Correa.

II. En el caso de que Moreno no se quede con AP, se espera que funde un nuevo movimiento. Se sentirá más cómodo representando el centro y actores como Gustavo Larrea (Democracia Sí), que jugarán un papel de bisagra entre el poder constituido de Moreno y la recreación de bases sociales en el territorio. Sin embargo, si esto sucede, Moreno habrá sufrido la primera gran derrota de la mano de Correa. En lo simbólico, lo debilita porque lo sitúa en una condición de no poder ni siquiera con su propio partido. En tal caso, Correa se constituiría como la verdadera oposición. De manera inédita –tal vez, nunca visto–, un partido que controlaba el Estado pasa por una redefinición de alianzas a ser oposición. Correa y AP volverían al “llano” de manera definitiva. Y esto, se mire por donde se mire, supondría un freno significativo a lo que Lenín Moreno ha venido a hacer.

La pugna está servida. Lo que pasará a partir de ahora es completamente incierto. Pero sí hay una certeza: la Revolución Ciudadana de Correa no tiene continuidad en la figura de Lenín Moreno. Esto ya sí es irreconciliable. Lenín Moreno ha decidido otro camino, cada vez más alejado del correísmo, tanto en forma como de fondo. La agenda es otra. Los aliados también. Y al interior de su gabinete no todo es monolítico. Las disputas internas han comenzado a aflorar por cuestiones programáticas, pero también por la lucha encarnizada de poder. Correa tiene la desventaja de estar por afuera, aunque todavía controla algunos resortes institucionales y puede tener la capacidad de capturar demandas no resueltas. Su poder de incidir en la agenda política del país aún es muy grande. Todo dependerá de cuándo quiera volver. Correa viviendo en Ecuador es seguramente diferente que aquel que pueda incidir desde Bruselas. Todo está por ver. El escenario sigue abierto.

La política ecuatoriana ha demostrado que no todo acaba en una elección. Tras una victoria, llega otro capítulo.

(Fuente: CELAG)

HAITÍ

HAITÍ: MUJERES QUE TUVIERON HIJOS CON CASCOS AZULES DEMANDAN A LA ONU

Diez mujeres haitianas que tuvieron hijos de efectivos de la misión de paz de Naciones Unidas en el país caribeño (MINUSTAH) se han unido en una demanda conjunta en Puerto Príncipe contra los supuestos padres y contra la organización internacional para reclamar no sólo un reconocimiento de la paternidad de estos menores, sino también medidas de asistencia.

Las mujeres denunciadas tuvieron un total de once hijos con efectivos procedentes de Uruguay, Argentina, Nigeria y Sri Lanka que, al término del despliegue, han regresado a sus respectivos países sin preocuparse de la manutención de la madre o del niño.

En uno de los casos, además, se da la circunstancia de que la mujer tenía 17 años cuando dio a luz, lo que implica un delito de violación conforme al Código Penal haitiano, ha advertido en un comunicado el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH).

“Estas madres y sus hijos han sufrido graves problemas económicos y discriminación. Seis de ellas se han quedado sin casa tras el paso del huracán Matthew en octubre de 2016”, ha explicado el letrado Mario Joseph, de la Oficina de Abogados Internacionales, que trabaja en el caso, según un comunicado.

Joseph ha explicado que, durante los últimos años, se han presentado varias solicitudes formales ante la ONU y el Gobierno haitiano para avanzar en las demandas de paternidad, pero todos los esfuerzos han sido en vano. Tampoco se han traducido en avances prácticos los compromisos de Naciones Unidas y de su actual secretario general, António Guterres, para combatir los abusos sexuales en las misiones de paz.

“La ONU ha tenido una política de ‘tolerancia cero’ durante años, pero en la práctica, la impunidad es la norma. A pesar de los reiterados compromisos, no ha tomado medidas apropiadas para acompañar a las víctimas ni se han adoptado represalias contra los miembros de las fuerzas de paz que han abandonado a sus hijos”, ha lamentado el abogado.

Por ahora, sólo algunas de las denunciadas han recibido ayuda de Naciones Unidas, y mínima. Así, Joseph ha explicado que varias de ellas pudieron trabajar a tiempo parcial para la organización y tuvieron acceso a una prueba genética cuyos resultados nunca llegaron a ver.

Un portavoz de Guterres, Farhan Haq, ha justificado a Thomson Reuters Foundation que la responsabilidad de los menores recae en los supuestos padres, toda vez que “Naciones Unidas por sí sola no puede establecer legalmente ninguna paternidad o medidas de apoyo para los niños”. Cualquier compensación, ha añadido, “es una cuestión de responsabilidad personal que debe ser determinada en procesos judiciales nacionales”.

Los casos de abuso han supuesto una de las muchas sombras que han lastrado la labor de la MINUSTAH, una misión que abandonó formalmente en Haití el pasado mes de octubre, 13 años después de su despliegue. La misión está acusada de introducir la epidemia de cólera que terminó matando a unas 10.000 personas.

La primera misión de los cascos azules llegó a Haití en los años 90 del siglo pasado y desde ese momento se registraron más de 2.000 denuncias contra ellos por abuso y explotación sexual en todo el mundo. En más de 300 de las denuncias las víctimas eran menores.

En un informe de la agencia AP se recogen los testimonios de decenas de mujeres, niñas y niños que denuncian haber sido víctimas de abusos sexuales de parte de miembros de la organización.

“Los actos sexuales descritos por nueve víctimas son simplemente demasiados para ser presentados exhaustivamente en este informe, en especial en virtud de que cada una afirma haber tenido múltiples acompañantes sexuales en diversos lugares donde los contingentes de Sri Lanka estuvieron instalados durante años en diversas partes de Haití”.

La evidencia muestra que al menos 134 miembros del contingente de Sri Lanka participaron entre 2004 y 2007 de violaciones, explotación y abuso. Luego de una investigación de parte de la ONU estos fueron retirados de la fuerza, pero ninguno cumplió condena por sus actos. No se tratan de los únicos. Cascos Azules de Bangladesh, Brasil, Jordania, Nigeria, Pakistán y Uruguay también tienen denuncias en su contra.

Los problemas no se limitan a los abusos. Muchas veces las secuelas del abuso se mantienen tiempo después de que los victimarios se han ido. Embarazos no deseados, infecciones de enfermedades de transmisión sexual como el VIH y epidemias de cólera son algunas de las secuelas con las que deben luego lidiar una población que, además, es considerada la más pobre del mundo, donde dos de cada tres haitianos vive con menos de dos dólares al día.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ya se había manifestado en 2015 sobre estos abusos: “Digámoslo con una sola voz: No toleraremos que nadie cometa o consienta la explotación ni el abuso sexual. No permitiremos que nadie tape estos delitos con la bandera de la ONU”. Sin embargo, estos reclamos han caído en oídos sordos. La organización continúa su presencia en la isla y las denuncias siguen apilándose, empeoradas por la falta de información.

La organización no gubernamental Blue Code ha comenzado en los últimos años a mantener estadísticas de los abusos, pero en muchas ocasiones la ONU desconoce los nombres de los oficiales que participan en los contingentes de los cascos azules. La organización registró 145 denuncias solo en 2016.

Los cascos azules se fueron de Haití en octubre. Pero dejaron un tendal de horror y denuncias. Alguien deberá hacerse cargo.

(Fuente: Nodal)

HONDURAS

COMUNICADO DEL SICSAL ANTE LOS ACONTECIMIENTOS ELECTORALES EN HONDURAS

- CONSIDERANDO que, el golpe de Estado de 2009, fue realizado en complicidad con el Gobierno de Estados Unidos y que, desde entonces, Honduras sufre permanentes violaciones a los derechos humanos (más de 123 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados, entre ellas, Berta Cáceres), siendo ello signo del clima represor institucional y de la consolidación de un Estado marcado por la corrupción y nexos con el narcotráfico.

- DENUNCIAMOS el fraude electoral perpetrado en Honduras a favor de Juan Orlando Hernández (JOH), realizando para ello evidentes irregularidades después que, el candidato de la Alianza Opositora contra la Dictadura, Salvador Nasralla, el mismo 26 de noviembre, tenía una ventaja de 5 puntos. La misma candidatura de JOH tenía vicios de inconstitucionalidad pues, según el Artículo 4 no se podía presentar a la reelección.

- DENUNCIAMOS a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Honduras por la represión en contra del pueblo, el cual, ejerciendo su derecho constitucional (Art 3) a la protesta se ha lanzado a las calles exigiendo el respeto a la voluntad popular. Pedimos que cese el ataque a las organizaciones sociales que se manifiestan contra el fraude.

- Por ello, DESCONOCEMOS la declaratoria realizada por el Tribunal Supremo Electoral que da como ganador a Juan Orlando Hernández.

- LLAMAMOS a un nuevo proceso electoral con garantías y transparencia, supervisado por la comunidad internacional, más allá de la OEA, en el que estén presentes las posturas de los movimientos sociales y populares de Honduras.

- ESPERAMOS y DESEAMOS, en esta época especial de Navidad y de Año Nuevo, que el pueblo hondureño alcance la paz y que, a pesar de la provocación institucional hacia la confrontación y la violencia, mantenga la serenidad y encuentre las vías pacíficas para exigir el respeto a su derecho a la elección de sus gobernantes.

18 Diciembre 2017

MÉXICO

EN RIESGO LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE CENTENARES FAMILIAS DESPLAZADAS-RETORNADAS EN CHALCHIHUITÁN

Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Colectivo que emite esta Acción Urgente, desde hace varios meses hemos recibido información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch'enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon– son 3858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres). Según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar.

Es grave que, como diversos testimonios confirman, continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones.

En estas condiciones, el riesgo de una masacre es claro. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero, ya que van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellas y ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia, todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazados/os, ahora retornadas/os.

Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal.

No obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó, al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos–, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad.

Ante esta situación grave y crítica, como colectivo de organizaciones que envía esta Acción Urgente, exigimos Alto a las acciones armadas en la región, reiteramos la exigencia de su

desarticulación, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades.

Fuente: <https://frayba.org.mx/>

NICARAGUA

DE REAGAN AL SENADO NORTEAMERICANO A LA NICA ACT

El sandinismo siempre ha estado sobre presión y agresiones por parte de Estados Unidos, de sus administraciones y de congresistas y senadores. **Ronald Reagan** fue quien más directo fue contra el sandinismo en el poder en los años 80, al financiar e impulsar la guerra con el firme objetivo de deponer del poder a los sandinistas, exigiendo que los contras fueran reconocidos como una fuerza militar legítima y que la oposición compartiera el poder, lo mismo que pasa ahora, en un intento de senadores y congresistas por darle aire a la fragmentada oposición criolla que ha sido incapaz de lograr en las calles y con los votos lo que se busca desde la capital norteamericana.

El mismo argumento de los 80

En su primera conferencia de prensa al inicio de su segundo mandato, Reagan dijo que solo estaba dispuesto a cambiar su política hacia Nicaragua “si el actual Gobierno se vuelve hacia los rebeldes y les dice que se integren en el Gobierno revolucionario para poner las cosas del derecho y establecer los objetivos”. Lo mismo que ahora, reformas electorales para satisfacer a la oposición a que pueda ganar elecciones.

Reagan insistía en que las elecciones del 84 no fueron creíbles y que los sandinistas no eran legítimos y que los hombres en armas y la oposición civil debían tener parte en el gobierno y alegaba que el financiamiento de la guerra era en legítima defensa. Ahora se dice que la presión de senadores y congresistas, la Nica Act y listas negras son legítimas y necesarias.

Igual que en los años 80, un grupo de nicaragüenses aplaude las presiones que provienen desde la capital de Estados Unidos. Pero igual que entonces, los políticos norteamericanos estarían violando la Ley de Neutralidad Nacional (National Neutrality Act), que prohíbe a Estados Unidos hacer la guerra o intervenir en forma hostil contra otro país con el cual la Casa Blanca tenga relaciones diplomáticas, o contra el cual no exista una declaración de guerra por parte del Congreso estadounidense. La Nica Act además iría en contravención de los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio.

De aprobarse en el 2018 la Nica Act, no sería la primera vez que Nicaragua sufre un bloqueo económico directo. Ya en los años 80, el Gobierno de Estados Unidos provocó que el 90% de la infraestructura productiva se haya visto afectada por el corte en el suministro de materias primas y la falta de divisas para mantener la economía nicaragüense.

A diferencia de entonces, hoy el gobierno sandinista mantiene un diálogo directo y constante con el sector privado, los trabajadores, sindicatos y el país es el que más crece económicamente después de Panamá y es el que tiene la mayor estabilidad social y de seguridad ciudadana en la región.

Fuente: Infore Pastran en <https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/>

PERÚ

EL INDULTO A FUJIMORI ENCIENDE LA POLÍTICA PERUANA

El indulto por “razones humanitarias” del ex presidente peruano Alberto Fujimori, condenado en 2006 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, ha encendido la política peruana. La medida ha puesto en el centro de las críticas al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien explicó al país que se trató de la decisión “más difícil” de su vida. Por la tarde del 25 de diciembre hubo manifestaciones en Lima y otras ciudades, en contra de la excarcelación, aunque también algunas a favor.

“Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un ex presidente del Perú, que habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena”, justificó el mandatario. Kuczynski argumentó que llegó a esta decisión porque, si bien durante la campaña electoral había negado la posibilidad de beneficiarlo con un indulto, propuso “alternativamente la dación de una Ley que hiciera posible el arresto domiciliario para personas de su condición, pero el Parlamento no recogió esta propuesta”.

Lo más sorprendente, más allá de las aclaraciones oficiales, fueron los elogios que Kuczynski regaló a la gestión de Fujimori al frente del Gobierno y cómo minimizó las condenas por delitos de lesa humanidad que pesan contra el expresidente, refiriéndose a ellas como “transgresiones significativas”.

“A todos nos es evidente que su Gobierno, que heredó al inicio de la década de los años 90 un país sumido en una crisis violenta, caótica, incurrió en transgresiones significativas a la ley, al respeto por la democracia y a los derechos humanos, pero también creo que su Gobierno contribuyó al progreso nacional”, declaró.

Alberto Fujimori se encuentra internado desde el sábado 23 de diciembre en una clínica de Lima por un cuadro de arritmia cardíaca. El 25 de diciembre su familia anunció que se encuentra estable y que en un día dejaría la Unidad de Cuidados Intensivos.

¿QUÉ DICE EL INFORME MÉDICO QUE JUSTIFICÓ SU INDULTO?

La resolución publicada en la tarde del día de Navidad se basó en un informe de la Junta Médica Penitenciaria. El mismo indica el siguiente diagnóstico: fibrilación auricular paroxística con riesgo moderado de tromboembolismo, hipertensión arterial crónica con crisis hipertensivas a repetición que han merecido atención de emergencia y evacuación, cardiopatía hipertensiva de grado leve-moderado, insuficiencia mitral e hipotiroidismo sub clínico.

El informe también hablaba de "cáncer de lengua tipo carcinoma epidermoide medianamente invasivo intervenido quirúrgicamente hasta en seis oportunidades con riesgo de recidiva, trastorno depresivo en tratamiento farmacológico, hipertrofia benigna prostática grado II, insuficiencia periférica vascular y hernia lumbar de núcleo pulposo L2-L3".

La misma Junta atendiendo al estado de salud recomienda el indulto por “razones humanitarias”.

¿SOLO SE TRATA DE UN INFORME MÉDICO?

La posibilidad de un indulto, que había sido negada enfáticamente por voceros del Gobierno, llegó apenas siete días después de que Kuczynski superara un pedido de destitución solicitado por el principal partido de la oposición y de mayoría en el Congreso, Fuerza Nueva, cuya líder es la excandidata a la presidencia e hija del indultado, Keiko Fujimori.

Para eludir los cargos, el presidente se valió de la sorpresiva abstención de diez legisladores del mismo partido que había impulsado el pedido en su contra y del que se esperaba una votación en bloque. Fuerza Nueva tiene 71 de los 130 escaños y para salir adelante la denominada “moción por vacancia” se necesitaban 87 legisladores, número que se habría alcanzado de no ser por ese cambio repentino en el voto opositor. Solo hubo 79 votos a favor de la destitución, 19 por la negativa y 21 legisladores se abstuvieron.

La concatenación de ambas circunstancias originó fundadas sospechas de que se trató de un canje a cambio de salvar su mandato. Incluso desde las mismas filas que responden a Keiko Fujimori se corrió la voz de que, efectivamente, las diez abstenciones en su partido, entre ellas la de su hermano menor, Kenji, se produjeron porque el Gobierno les prometió liberar a su padre cuando recibiera un informe de salud. Así ha sucedido.

No son nuevas las posturas enfrentadas entre los hermanos respecto a la liberación de Alberto Fujimori. Mientras Kenji ha sido un activo defensor de su puesta en libertad y la ha venido solicitando por todos los medios posibles, Keiko ha preferido desvincularse con la idea de llegar al gobierno y, una vez en la presidencia, poder decidir sobre el particular.

Con independencia de esas diferencias, a la debilidad de su Gobierno, este indulto arrastra para Kuczynski unos efectos que pueden ser demoledores para la continuidad de su gestión: el cuestionamiento casi unánime de su propio electorado que le acusa de traidor, y una posible ruptura en las filas internas del partido que representa, Peruanos por el Cambio (PPK).

De los escasos 18 escaños en la Cámara, dos sumaron su apoyo a la medida y otros tres, Alberto de Belaúnde, Vicente Zevallos y Gino Costa, ya han anticipado que dejarán el grupo parlamentario. También presentó su renuncia quien presidía la Dirección General de Derechos Humanos, Roger Rafael Rodríguez Santander.

UN MANDATARIO CERCADO POR EL CASO ODEBRECHT

Hace poco más de un mes saltó el escándalo: el presidente peruano estaría vinculado a la trama de corrupción de la constructora brasilera Odebrecht, envuelta en el pago de sobornos a cambio de obtener obras públicas en gran parte de los países de América Latina. Solo en Perú entre los años 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, la empresa habría pagado hasta 29 millones de dólares para quedarse con obras públicas.

Al parecer, las evidencias de “una posible vinculación” del mandatario con la empresa constructora brasilera se remontan a los años 2008/2009, cuando el ahora presidente ocupaba cargo ejecutivo en la compañía First Capital Partners, de la cual era cliente Odebrecht en por lo menos tres obras de envergadura desarrolladas en territorio peruano. La más destacada, la carretera Interoceánica sur, cuya licitación obtuvo tras pagar sobornos por valor de 20 millones, que habrían sido entregados al expresidente Toledo, actualmente en prisión.

Fue el propio ex director ejecutivo de esa compañía, Marcelo Odebrecht, quien denunció ante los fiscales peruanos que además de contratarlo como consultor, había financiado la campaña electoral de Kuczynsky.

El presidente ha negado tajantemente tal vinculación. “Yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht”, escribió en su cuenta personal de Twitter el pasado 14 de noviembre.

Sin embargo, para la oposición no fueron suficientes las explicaciones dadas y tras solicitar su renuncia, se llegó a la moción de vacancia por “permanente incapacidad moral” a la que fue sometido el lunes 21 de diciembre y en la que sorprendió que no se lograra su aprobación, cuando parecía imposible evitar su destitución.

“RECONCILIACIÓN” CON SABOR A IMPUNIDAD

Tras superar el fallido intento de destitución, Pedro Pablo Kuczynski llamó a la “reconciliación y reconstrucción” del país, y prometió abrir “un nuevo capítulo” en la historia política del país. A la luz de lo sucedido, todo parece indicar que esas palabras no fueron casuales.

Es bastante usual en la experiencia latinoamericana que los presidentes utilicen un llamado a la “reconciliación” para esconder, o al menos justificar y apaciguar, medidas que presuponen antipopulares y que, en todos los casos, se implementan con sesgos ciertos de impunidad.

Tal fue el caso del ex presidente argentino, Carlos Saúl Menem, que en el decreto N° 1003 de octubre de 1989 fundamentó el indulto de los genocidas de la dictadura en la búsqueda de “la reconciliación, el mutuo perdón y la unión nacional”.

También el ex presidente chileno Patricio Aylwin consultado en 1992 sobre el posible enjuiciamiento del dictador Augusto Pinochet y otros hombres del régimen, expresó que deseaba “que cada uno sea juzgado, en todos los casos”, pero aclaró que la justicia debía hacerse en tanto hubiera posibilidad. “La justicia debe hacerse en la medida de lo posible. Es probable que sin ley de amnistía la proliferación de los casos hubiera creado un clima peligroso para la reconciliación”, afirmó.

Más recientemente, el pasado 8 de septiembre, en su visita a Colombia el Papa Francisco expresó, precisamente, que “la reconciliación, no puede ser una excusa para legitimar la injusticia”.

Ayer mismo, Keiko Fujimori, en su visita a la clínica donde está internado su padre también apeló a la reconciliación. “Esperamos que este paso que se ha dado se abra sin odios y que se genere la reconciliación que todos los peruanos estamos esperando”, expresó.

Fuente: <https://elsaltodiario.com/>

VENEZUELA

LAS DOCE VICTORIAS DEL PRESIDENTE MADURO EN 2017

Ignacio Ramonet. Rebelión

Para empezar, hay que recordar que el Presidente Nicolás Maduro es el mandatario más injustamente acosado, calumniado y agredido de la historia de Venezuela. Más aún que el propio comandante Hugo Chávez, fundador de la Revolución Bolivariana... Sacar como sea a Nicolás Maduro del palacio de Miraflores ha sido y es el objetivo enfermizo de la oposición reaccionaria interna y de sus poderosos aliados internacionales comenzando por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Apenas empezó el año 2017, los ataques contra el Presidente arrancaron de inmediato. La primera agresión vino de la Asamblea Nacional, controlada por la contrarrevolución, que decidió, el 9 de enero, «desconocer» al Presidente. Y acusó a Nicolás Maduro de haber «abandonado su cargo». Algo falso y absurdo.

Ante esa tentativa de golpe de estado constitucional -inspirado en el modelo de golpe parlamentario que derrocó a Dilma Rousseff en Brasil en 2016-, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino para señalar que, en virtud de la Constitución, la Asamblea Nacional no puede destituir al jefe de Estado, directamente elegido por el pueblo.

Por su parte, el Presidente respondió a esa tentativa de golpe organizando, el 14 de enero, unas masivas maniobras cívico-militares denominadas «Ejercicio de acción integral antimperialista Zamora 200». Se movilizaron unos 600 000 efectivos entre militares, milicianos y militantes de los movimientos sociales. Y ofreció de ese modo una imponente demostración de la unidad de las

fuerzas armadas, el Gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las masas populares. Esa fue la primera victoria de 2017.

Envalentonada por la elección, en Estados Unidos, de Donald Trump -candidato de la derecha suprematista que tomó posesión de su cargo en Washington el 20 de enero...-, la oposición venezolana trató de intimidar al Gobierno madurista con una gran marcha en Caracas el 23 de enero, fecha de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Pero ahí también fracasó de manera patética. Entre otras razones, porque el Presidente Maduro respondió organizando, ese mismo día, el traslado popular de los restos de Fabricio Ojeda, líder revolucionario del derrocamiento de Pérez Jiménez, al Panteón Nacional. Al llamado del mandatario, acudieron en masa centenares de miles de caraqueños que llenaron las avenidas de la capital. Y se pudo ver netamente como el chavismo popular domina las calles, mientras que la oposición exhibía sus divisiones y su escualidez extrema. Esa fue la segunda victoria del Presidente Maduro.

Poco después se produjo la intervención del Tribunal Supremo, el cual subrayó que la Asamblea Nacional se halla en situación de «desacato» desde 2016. En efecto, como se recordará, en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, se denunciaron fraudes en el estado Amazonas. Fraudes demostrados por grabaciones en las cuales la secretaria de la gobernación del estado ofrecía sumas de dinero a grupos de electores para votar por los candidatos opositores. En consecuencia, el TSJ suspendió a esos diputados. Pero la Asamblea Nacional persistió en juramentarlos. Porque la suma de esos tres asambleístas suplementarios le hubiera conferido a la oposición una mayoría absoluta cualificada (dos tercera partes de los diputados) y el poder de derogar leyes orgánicas y de limitar la acción del propio Presidente...

Las tensiones entre un Parlamento y un Tribunal Supremo son relativamente frecuentes en todas las grandes democracias. En Europa por ejemplo, cuando surge un conflicto constitucional entre poderes, es habitual que el Tribunal Supremo asuma competencias del Parlamento. Y en Estados Unidos, hasta un presidente tan esotérico como Donald Trump ha tenido que acatar las decisiones recientes de la Corte Suprema...

Pero, en Caracas, la contrarrevolución utilizó ese debate para relanzar una campaña internacional sobre la pretendida «ausencia de democracia en Venezuela». Con la complicidad de la nueva Administración estadounidense, montó una colosal operación de linchamiento mediático mundial contra Nicolás Maduro. Movilizando a los principales medios dominantes de comunicación: desde CNN y Fox News hasta la BBC de Londres, más los medios principales de América Latina y del Caribe, y los más influyentes diarios globales, pilares de la hegemonía comunicacional conservadora, así como las redes sociales.

Al mismo tiempo, la derecha venezolana maniobró con la intención de internacionalizar el conflicto interno trasladándolo al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), «ministerio de las colonias de Estados Unidos» según Che Guevara. Obedeciendo a consignas del nuevo gobierno de Donald Trump y con el apoyo de varios regímenes conservadores de América Latina, Luis Almagro, secretario general de la OEA, asumió entonces el miserable rol de liderar esa maniobra reclamando la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela.

Pero Caracas contraatacó al momento, y consiguió la solidaridad diplomática de la mayoría de los Estados latinoamericanos y caribeños. A pesar de los deshonestos ardides y de los falsos argumentos del Secretario General de la OEA, Venezuela jamás pudo ser puesta en minoría. Venció de manera irrefutable. Y los enemigos de la Revolución Bolivariana, entre ellos Washington, se rompieron los dientes contra la sólida estrategia imaginada por el Presidente Maduro, basada en la realidad de los hechos, la honestidad política y la ética. Finalmente, en abril, Caracas decidió retirarse de la OEA, acusando a esa organización de « acciones intrusivas contra la soberanía de Venezuela». Con imaginación y audacia, en ese complejo escenario internacional, Nicolás Maduro consiguió así su tercera gran victoria de 2017.

Entretanto, las tensiones aumentaron en Caracas cuando, el 29 de marzo, la Sala Constitucional del TSJ declaró que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias

parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”. Anteriormente, el TSJ ya había señalado también que la inmunidad parlamentaria de los diputados «sólo se ampara durante el ejercicio de sus funciones», lo cual no era el caso al hallarse la Asamblea Nacional «en desacato»...

La oposición antichavista puso el grito en el cielo. Y con la ayuda, una vez más, de las fuerzas conservadoras internacionales pasó a propulsar un plan sedicioso contrarrevolucionario. Empezó entonces la larga y trágica «crisis de las guarimbas». Durante cuatro interminables meses –de abril a julio- la contrarrevolución lanzó la más desesperada y brutal ofensiva bélica contra el Gobierno bolivariano. Financiadas en dólares por la derecha internacional, las fuerzas antichavistas –lideradas por Primero Justicia y Voluntad Popular, dos organizaciones de extrema derecha- no dudaron en utilizar a paramilitares, a agentes terroristas y a mercenarios del crimen organizado en un despliegue de tácticas irregulares simultáneas, así como a una élite de expertos en guerra psicológica y propaganda “democrática”. Con la finalidad patológica de derrocar a Nicolás Maduro.

Ebrias de violencia, las hordas ‘guarimberas’ se abalanzaron al asalto de la democracia venezolana. Atacaron, incendiaron y destruyeron hospitales, centros de salud, guarderías, escuelas, liceos, maternidades, almacenes de alimentos y de medicinas, oficinas gubernamentales, cientos de negocios privados, estaciones de metro, autobuses, mobiliario público... Mientras multiplicaban las barricadas en las urbanizaciones burguesas que controlaban.

Los violentos, arrojando decenas de cócteles molotov, se cebaron particularmente contra los efectivos de los cuerpos de seguridad. Cinco uniformados fueron asesinados a tiros. Por otra parte, muchos ‘guarimberos’ dieron muestra de un terrible salvajismo cuando tensaron finos cables de acero en las vías públicas para degollar a motociclistas... O cuando, rebosantes de odio y de racismo, quemaron vivos a jóvenes chavistas. Veintinueve en total, de los cuales fallecieron nueve. Resultado: ciento veintiuna personas asesinadas, miles de heridos y pérdidas millonarias.

Durante esos cuatro meses de arrebatos contrarrevolucionarios, la oposición también llamó a atacar bases militares, y trató de empujar a las fuerzas armadas a marchar contra el Gobierno legítimo y a asaltar el Palacio presidencial. La extrema derecha golpista lo intentó todo para generar una guerra civil, fracturar la unión cívico-militar, y destruir la democracia venezolana.

Al mismo tiempo, a escala internacional, seguía la frenética campaña mediática presentando a los que incendiaban hospitales, asesinaban a inocentes, destruían escuelas y quemaban a gente viva, como « héroes de la libertad ». Era el mundo al revés, el de la ‘post-verdad’ y de los ‘hechos alternativos’

No fue fácil resistir a tanto terror, a tanta agresión, y controlar el orden público con una visión de autoridad democrática, de proporcionalidad y de respeto a los derechos humanos. El presidente Nicolás Maduro, constitucional y legítimo, lo consiguió. Y logró hallar lo que parecía imposible: la salida del laberinto de la violencia. Con una idea genial, que nadie esperaba. Y que descolocó y desconcertó a la oposición: volver al poder constituyente originario.

El pretexto del terrorismo ‘guarimbero’ residía, en efecto, en el desacuerdo entre dos legitimidades: la del Tribunal Supremo de Justicia y la de la Asamblea Nacional. Ninguna de las dos instituciones quería dar su brazo a torcer. ¿Cómo salir del impasse? Basándose en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución chavista de 1999, y apelando a su estatus de Jefe del Estado y de árbitro máximo, el Presidente Maduro decidió reactivar un proceso popular constituyente. Era el único modo de hallar, por la vía del diálogo político y de la palabra, un acuerdo con la oposición. Y de regular el conflicto histórico, para idear soluciones a los problemas del país. Lo pensó muy bien y esperó el momento adecuado. Hasta que, el 1° de mayo, se dieron todas las condiciones. Ese día, el Presidente anunció que la elección de los delegados a la Asamblea Constituyente se efectuaría el 30 de julio. Era la única opción para la paz.

Pero, de nuevo, confirmando su desesperante torpeza política, la oposición rechazó la mano tendida. Entre vítores de la prensa mundial, como parte de la campaña brutal e inclemente contra la Revolución Bolivariana, los partidos opositores acordaron no participar... Y se dedicaron, al

contrario, a sabotear las elecciones, a impedir el acceso al sufragio, a poner barricadas, a quemar urnas y a amenazar a quienes deseaban ejercer su derecho a elegir.

Fracasaron. Fueron incapaces de impedir que, el 30 de julio, la gente saliera masivamente a apostar por la democracia contra la violencia y el terror. Más de ocho millones y medio de ciudadanos acudieron a votar. Venciendo toda suerte de obstáculos. Afrontando paramilitares y 'guarimberos'. Franqueando calles bloqueadas. Cruzando arroyos y ríos. Haciendo lo imposible para cumplir con su deber cívico, político, ético, moral... Superando las amenazas de adentro y de afuera.

Pocos esperaban tan alto grado de movilización popular, esa afluencia de votantes y el rotundo éxito electoral. Al día siguiente, como lo había vaticinado el Presidente, las 'guarimbas' se dispersaban. La violencia se desvanecía. La paz volvía a reinar. Con sutileza, paciencia, coraje y decisión, y una fina inteligencia estratégica, el Presidente Maduro logró de ese modo derrotar a las 'guarimbas' y abortar la evidente intentona golpista. Se plantó con firmeza frente a las amenazas, y lo hizo sin alterar lo sustancial de su política. Esa fue su victoria más espectacular del año 2017.

«La llegada de la Constituyente -comentó Nicolás Maduro- significó, sin lugar a dudas, la llegada de un clima de paz que permitió impulsar la ofensiva política de la Revolución Bolivariana.» Y esa ofensiva favoreció lo que muchos creían imposible : otras dos sensacionales y rotundas victorias electorales. La de los gobernadores de los estados, el 15 de octubre, con la conquista de 19 gobernaturas sobre 23 posibles... Entre ellas, la de Miranda y la de Lara, dos estados cuya política social estaba casi en extinción en manos de la oposición. Y más tarde el triunfo en Zulia, un estado estratégico, de gran peso demográfico y poseedor de importantes yacimientos de petróleo y gas...

Asimismo, la Revolución Bolivariana ganó las elecciones municipales del 10 de diciembre, con la obtención de 308 alcaldías sobre 335, o sea el 93% de los municipios... El chavismo se impuso en 22 (de 24) ciudades capitales, incluyendo Caracas. Mientras que la contrarrevolución confirmaba su impopularidad con un descenso en picada de sus electores, perdiendo más de 2 millones 100 mil votos...

Mostrando al mundo la vitalidad de su sistema democrático, Venezuela fue el único país que organizó, en 2017, tres grandes elecciones nacionales... La tres ganadas por el chavismo. Mientras la derecha, desmoralizada por tantos desastres sucesivos, quedaba atomizada, desunida, groggy... Sus líderes enfrentados. Sus seguidores aturdidos. Aunque conservó el apoyo de sus protectores internacionales. En particular el del más agresivo de ellos: el nuevo presidente Donald Trump de Estados Unidos.

A lo largo de 2017 -en continuidad a la orden ejecutiva del 8 de marzo de 2015, firmada por Barack Obama, en la que se declaró a Venezuela "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de EE.UU."-, Donald Trump emitió una lista de sanciones contra la Revolución Bolivariana.

En particular, el 11 de agosto, amenazó con una acción militar. Hablando a periodistas en su campo de golf de New Jersey, Trump dijo: «Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesario». Luego, el 25 de agosto, en el marco del bloqueo financiero contra Caracas, Trump prohibió que "cualquier persona, entidad, empresa o asociación, legalmente radicada o que realice actividades en Estados Unidos, pueda efectuar negocios con nuevos bonos de deuda que sean emitidos por cualquier instancia del Gobierno venezolano, a saber, bonos de la República emitidos por el Banco Central venezolano o la empresa estatal Pdvsa".

Esas sanciones apuestan a que Venezuela caiga en default (impago de su deuda externa) porque le cierran al Estado y a Pdvsa las puertas de los mercados financieros asociados a EE.UU. Impidiéndole ofrecer allí bonos, y poder obtener divisas.

Ya Lawrence Eagleburger, ex-Secretario de Estado del presidente George W. Bush, había reconocido abiertamente, en una entrevista a Fox News, que la guerra económica contra Venezuela había sido efectivamente diseñada en Washington : « Debemos usar las herramientas económicas –afirmó el ex-Secretario de Estado– para hacer que la economía venezolana empeore,

de tal manera que la influencia del chavismo en el país y en la región se vaya a pique (...) Todo lo que podamos hacer para que la economía venezolana se hunda en una situación difícil, está bien hecho. » El actual secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, confirmó oficialmente que las nuevas sanciones tienen por objetivo «estrangular a Venezuela».

Frente a tan insolentes agresiones, Nicolás Maduro declaró que el default «nunca llegará». Primero porque Venezuela es el país suramericano que más ha pagado su deuda. En los últimos cuatro años, Caracas canceló unos 74 mil millones de dólares... Y porque el gobierno bolivariano “siempre tendrá una estrategia clara” enfilada hacia la renegociación y reestructuración de la deuda externa. El mandatario denunció que lo que buscan los enemigos del chavismo es aislar financieramente a la Revolución Bolivariana hasta que no tenga posibilidades de crédito. Para ir ahogándola poco a poco. Quieren generar temor en los inversores privados, para que no compren bonos, no participen en la renegociación de la deuda y no haya inversión. Nicolás Maduro explicó que más allá de un bloqueo, lo que enfrenta Venezuela es una auténtica «persecución» en la que también participan países como Canadá y los de la Unión Europea. Una persecución activa al comercio, a las cuentas bancarias y a los movimientos financieros.

Pero el mandatario supo esquivar esos ataques. Y sorprendió, una vez más, a sus adversarios cuando anunció, el 3 de noviembre, la creación de una Comisión para consolidar el refinanciamiento y la reestructuración de la deuda externa, con el propósito de superar las agresiones financieras. «Vamos a hacer un reformato completo de los pagos externos para lograr el equilibrio –declaró- Vamos a romper los esquemas internacionales.» Y así fue. Unos días más tarde, desafiando el bloqueo financiero, y como parte del primer acercamiento para la renegociación y reestructuración planteada por el Presidente, llegaba a Caracas, a reunirse con el Gobierno bolivariano, un grupo de tenedores de deuda venezolana procedentes de Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón y Alemania. Lo cual constituyó una indudable victoria para el Presidente Maduro.

Aquí conviene precisar que el conflicto de cuarta generación contra la Revolución Bolivariana tiene varios frentes e incluye de manera simultánea y continuada cuatro guerras : 1) una guerra insurreccional diseñada por expertos en subversión, sabotaje y psicología de masas, con empleo de mercenarios, explosión cíclica de ‘guarimbas’ criminales y ataques terroristas contra cuarteles, objetivos militares e infraestructuras globales (red eléctrica, refinerías, distribución del agua, etc.) ; 2) una guerra mediática, con la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales convertidas en nuevos ejércitos de conquista mediante el empleo planificado de la propaganda orientada a domesticar las mentes y a seducir los corazones ; 3) una guerra diplomática con acoso en algunos foros internacionales, en particular en la OEA, y ataques de los países del llamado “grupo de Lima” a los que se suman regularmente los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea ; y 4) una guerra económica y financiera con acaparamiento y desabastecimiento de los alimentos y de los medicamentos, manipulación del tipo de cambio de la moneda por oficinas ilegales, inflación inducida, bloqueo bancario y distorsión del riesgo país.

A propósito del riesgo país, no hay que olvidar que, en los últimos cuatro años, como ya se dijo, Caracas honró todos sus compromisos de pago de deuda, sin excepción, por más de 74.000 millones de dólares. Lo cual debería haber hecho disminuir drásticamente el riesgo país. Pues no se corre ningún riesgo prestándole a Venezuela ya que paga religiosamente todas sus deudas. Sin embargo, el riesgo país ha seguido aumentando... Actualmente, según el banco JP Morgan, su riesgo país se sitúa en 4.820 puntos, o sea treinta y ocho veces más alto que el de Chile, país que tiene el mismo ratio de deuda/PIB que Venezuela... Se le hace pagar así, muy caro, a Caracas por haber optado, democráticamente, por un sistema político socialista.

En cuanto al bloqueo bancario, a lo largo de 2017, y en particular después de las sanciones de Donald Trump, las cancelaciones unilaterales de contratos se multiplicaron. En julio, por ejemplo, el agente de pago Delaware informó que su banco corresponsal, el PNC Bank de Estados Unidos, se negaba a recibir fondos procedentes de Pdvs. En agosto, Novo Banco de Portugal notificó a Caracas la imposibilidad de realizar operaciones en dólares por bloqueo de los bancos

estadounidenses intermediarios. Más tarde, el Bank of China Frankfurt, aliado de Caracas, tampoco pudo pagar 15 millones de dólares adeudados por Venezuela a la empresa minera canadiense Gold Reserve... En noviembre, más de 39 millones de dólares -por pago de 23 operaciones de compra de alimentos para las fiestas navideñas- fueron devueltos a Caracas porque los bancos intermediarios de los proveedores no aceptaron dinero de Venezuela

Por otra parte, a principios de septiembre, se conoció que la empresa financiera Euroclear, filial del banco estadounidense JP Morgan, bloqueó un pago de 1.200 millones de dólares efectuado por el gobierno bolivariano para adquirir medicamentos y alimentos. Eso impidió la adquisición de 300.000 dosis de insulina... Al mismo tiempo, un laboratorio colombiano, perteneciente al grupo sueco BSN Medical, se negó a aceptar el pago por Venezuela de un cargamento de primaquina, medicamento para el tratamiento del paludismo y la malaria.

El objetivo de todos estos bloqueos es impedir que el Gobierno bolivariano pueda utilizar sus recursos para adquirir los alimentos y los medicamentos que necesita la población. Todo ello con la intención de empujar a la gente a la protesta y de generar caos en el sistema de salud, poniendo en peligro la vida de miles de enfermos.

En este caso, gracias a sus relaciones internacionales, el Presidente concretó, en noviembre, la llegada urgente al país de importantes cargamentos de insulina procedentes de India. Centenares de pacientes, en peligro de muerte, pudieron salvar su vida. Lo cual, sin duda, constituyó una nueva victoria de Nicolas Maduro.

Para quebrar el bloqueo financiero, el Presidente anunció, en noviembre, otra iniciativa: la creación de una moneda digital, el petro. Ese anuncio despertó un fuerte entusiasmo en la comunidad de inversores de las criptomonedas, colocó a Venezuela en la vanguardia de la tecnología y las finanzas globales, y generó enormes expectativas. Tanto más cuanto que el precio del petro no estará vinculado a los caprichos y a la especulación de los mercados, sino que se asociará al valor internacional de activos reales como el oro, el gas, el diamante y el petróleo. Venezuela dio así un paso enorme para poseer un mecanismo revolucionario de financiamiento al que ninguna potencia extranjera podrá imponer sanciones, ni boicotear la llegada de capitales. En ese sentido, el petro es una clara victoria más del Presidente Maduro.

Hay que añadir que, en medio de todas estas batallas, y a pesar del quiebre total del modelo de dependencia petrolera, el Presidente se preocupó muy particularmente de que el socialismo bolivariano no se detuviese y que a los más humildes no le faltase escuela, trabajo, techo, cuidados médicos, ingresos, alimentos... El Gobierno revolucionario no dejó de financiar obras públicas fundamentales. Ni de edificar viviendas : en 2017, se entregaron más de 570 mil viviendas... Se mantuvo la Misión Barrio Adentro y todas las Misiones sociales. Se consolidó el Plan Siembra. Se extendió la Misión Abastecimiento Soberano. Se multiplicaron las Ferias del Campo Soberano... Se hizo de tripas corazón y en medio de tantos tormentos, el Presidente Maduro consiguió un milagro social de salvación del país. La contrarrevolución no pudo detener el avance del socialismo.

En esa perspectiva, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), modelo centralizado de distribución directa, continuaron desarrollándose en todo el país y ya alcanzan a cuatro millones de venezolanos de los sectores populares a los que protegen del desabastecimiento causado por la guerra económica.

Además, el Presidente Maduro lanzó, a lo largo de 2017, nuevas iniciativas sociales. La más espectacular fue la del Carné de la Patria, nuevo documento de identificación que permite conocer, mediante un sistema de códigos QR, el estatus socioeconómico de los ciudadanos. Y favorece de ese modo el acceso de las familias necesitadas a las ayudas sociales de las misiones socialistas. A fines de diciembre de 2017, un total de 16 millones y medio de ciudadanos se habían registrado en el Carné de la Patria.

El Presidente impulsó también la creación del movimiento 'Somos Venezuela' con la finalidad de agilizar el proceso de asignación de las ayudas sociales. Los doscientos mil brigadistas de 'Somos Venezuela' tienen por tarea la identificación, casa por casa, de las necesidades de las familias

registradas. Después, asignan las ayudas a las familias de acuerdo a las verdaderas necesidades. Otro de los objetivos importantes del movimiento 'Somos Venezuela' es garantizar el 100% de pensionados en todo el país, como lo prometió Nicolás Maduro.

El Presidente propuso también el plan 'Chamba Juvenil' dirigido a los jóvenes de entre 15 y 35 años de edad, con el propósito de incorporarlos al empleo en áreas orientadas a la satisfacción de necesidades humanas identificadas a través del Carnet de la Patria, y enmarcado en el movimiento 'Somos Venezuela'. El plan se dirige, en particular, a los jóvenes universitarios desocupados, los jóvenes no escolarizados, las madres solteras con carga familiar, y los jóvenes en situación de calle. Se estima que este nuevo Plan generará unos 800 mil empleos.

Todos estos avances sociales constituyeron, sin ninguna duda, algunas de las más preciadas victorias del Presidente Maduro en 2017.

Podríamos citar también los éxitos obtenidos en el campo de la política extranjera, en particular la extraordinaria gira internacional del mandatario, en octubre, por Bielorrusia, Argelia, Rusia y Turquía que culminó con importantes acuerdos bilaterales destinados a ganarle la batalla a la guerra económica y social. O las incesantes negociaciones mantenidas por el Presidente con los países productores de petróleo (OPEP y no-OPEP) que permitieron, en 2017, un espectacular incremento de los precios del barril en más de un 23% !

Citar igualmente la gran ofensiva contra la corrupción iniciada, por fin, en noviembre con el anuncio de varias decenas de detenciones espectaculares entre los altos mandos gerenciales y directivos de Pdvsa y de Citgo, incluyendo dirigentes de primera línea. Nada parecido había ocurrido en cien años de industria petrolera venezolana. Esta fue sin duda la victoria más comentada del Presidente Maduro a finales de 2017.

Para terminar, hay que volver a señalar que la destrucción de la imagen de Nicolás Maduro es la finalidad principal de las campañas mundiales de propaganda pilotadas por las grandes corporaciones de la comunicación. Sin olvidar la permanente guerra digital en la esfera de Internet mediante múltiples plataformas en la Web, y las redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, Instagram, etc. Todas estas armas de manipulación masiva tratan de degradar la figura del Presidente y manipular la realidad venezolana. Invisibilizan el nivel de respaldo real de amplios sectores de la población hacia el mandatario, y ocultan las violencias de la oposición. El objetivo es político: doblegar a la Venezuela bolivariana, actor clave del sistema-mundo, no sólo por sus cuantiosas riquezas sino, sobre todo, por su modelo revolucionario y social. Y obviamente por su importancia geopolítica en tanto que potencia anti-imperialista de influencia regional.

Hasta ahora, todos esos planes para defenestrar a Nicolás Maduro han fracasado. Como él mismo afirmó: «El imperialismo no ha podido asfixiarnos, ni podrá contra la Revolución Bolivariana en ninguno de los campos que nos busque.» Al contrario, el Presidente se ha fortalecido en 2017.

Eso le ha permitido retomar la iniciativa estratégica para la pacificación del país. Preocupado por la defensa de los grandes intereses nacionales, y apegado a los principios de honestidad y de máxima humildad, Nicolás Maduro le ha propuesto a la oposición sentarse a la mesa de negociación y retomar el diálogo. Esta vez en el escenario neutro de Santo Domingo. Sobre la base del respeto y del reconocimiento mutuo. Con la idea de restablecer una negociación nacional permanente como método democrático para defender el interés superior de la nación y para regular el conflicto que surge naturalmente de las diferencias políticas en medio de una revolución. Semejante avance hacia la paz ha sido quizás la victoria más apreciada del Presidente.

En este año heroico de brutales ataques e infinitas agresiones, el chavismo ha demostrado su fortaleza y su capacidad de superación. Y ha conseguido ampliar su base de apoyo, incrementando las fuerzas políticas y sociales en favor de la revolución. Ahí está, más sólido que nunca. Lo cual significa un alivio y una luminosa esperanza para toda América Latina. Mal que le pese a sus enemigos, el Presidente Nicolás Maduro ha confirmado –con sus doce brillantes victorias de 2017- que sigue siendo, como dicen sus admiradores, «indestructible».